

Santiago, veinte de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos:

En estos autos RIT T-130-2018, RUC 1840014049-8, del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, caratulados “Mayorga Caro Pamela con Gobierno Regional de Los Lagos”, por sentencia de veinte de febrero de dos mil diecinueve, se rechazó en todas sus partes la denuncia de tutela de derechos fundamentales, y la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones.

El demandante dedujo recurso de nulidad, invocando la causal prevista en el artículo 478 letra b) y, en subsidio, la del artículo 477, en relación con los artículos 7 y 8, del Código del Trabajo, y una sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por resolución de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, lo rechazó.

Respecto de dicha decisión la demandante interpuso recurso de unificación de jurisprudencia para que esta Corte lo acoja y dicte sentencia de reemplazo que acoja la demanda en todas sus partes.

Se ordenó traer estos autos a relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho respecto de la cual se solicita se unifique la jurisprudencia, consiste en determinar la normativa aplicable a una persona natural contratada bajo la modalidad de honorarios por organismos del Estado, en atención a si las funciones desplegadas corresponden o no a los requisitos de contratación conforme a cometidos específicos y si se han ejecutado bajo índices de subordinación y dependencia, precisando si se rige por el artículo 4° de la Ley 18.883 o por el Código del Trabajo.

Reprocha que no se haya aplicado la doctrina sostenida en las decisiones



que apareja para efectos de su cotejo, de la cual se desprende que debe aplicarse la normativa contenida en el Código del Trabajo a las prestaciones de servicios respecto de personas naturales que han sido contratadas a honorarios por el Estado, cuando dicha contratación se realizó fuera del marco legal que establece, concurriendo índices de subordinación y dependencia, estimándose que ciertas funciones, como las que fueron acreditadas en el caso, no constituyen cometidos específicos, lo que permite calificar el vínculo de laboral.

Tercero: Que dada la conceptualización que el legislador ha hecho del recurso en estudio, constituye un factor necesario para alterar la orientación jurisprudencial de los tribunales superiores de justicia acerca de alguna determinada materia de derecho “objeto del juicio”, la concurrencia de, a lo menos, dos resoluciones que sustenten distinta línea de razonamiento al resolver litigios de idéntica naturaleza. De esta manera, no se aviene con la finalidad y sentido del especial recurso en análisis, entender como una contraposición a la directriz jurisprudencial la resolución que pone fin a un conflicto sobre la base de distintos hechos asentados o en el ámbito de acciones diferentes, en tanto ello supone necesariamente la presencia de elementos disímiles, no susceptibles de equipararse o de ser tratados jurídicamente de igual forma.

Cuarto: Que la sentencia de base estableció como hechos asentados que entre la actora y el Gobierno Regional de Los Lagos se celebraron diversos contratos de servicios a honorarios (11 Noviembre 2014 con vigencia el mes de Diciembre 2014, 31 diciembre 2014 con vigencia Enero –Junio 2015, 31 Diciembre 2015 con vigencia Enero a Marzo 2016, 31 Marzo 2016 con vigencia Abril a Junio 2106, 31 Junio 2016 con vigencia Julio a Diciembre 2016, 30 Diciembre 2016 con vigencia Enero a Marzo 2017, y 31 Marzo 2017 con vigencia Abril a Junio 2017). En todos estos convenios la función encomendada era la de levantamiento de cartera de proyectos en el marco del Plan Patagonia Verde en la provincia de Chaitén.

De igual modo, suscribió otros 3 convenios a honorarios, con la demandada (30 Junio 2017 con vigencia de Julio a Septiembre 2017, 29 Septiembre 2017 con vigencia Octubre a diciembre 2017, 29 Diciembre 2017 con vigencia mes de Enero 2018) en los que además de la labor de levantamiento de proyectos, se agregó la de “apoyar profesionalmente en su calidad de arquitecta a otros servicios públicos con el objetivo de fortalecer el Plan de Reconstrucción de Chaitén. El lugar de



prestación de los servicios fue la ciudad de Chaitén, en dependencias de la Gobernación Provincial de Chaitén y en terreno.

Finalmente, el 1 Febrero 2018 celebró un nuevo convenio con vigencia entre Febrero y Diciembre 2018, para desarrollar una nueva función consistente en “prestar asesoría destinada a la revisión y seguimiento en la presentación y elaboración de Planos Reguladores e instrumentos de planificación regional; coordinar y hacer seguimiento del Convenio de Colaboración entre el Gobierno Regional, Subdere y Cámara Chilena de la Construcción y apoyar al Departamento de Ordenamiento Territorial en la coordinación y aplicación de herramientas de planificación regional”. El lugar de prestación de los servicios se trasladó al Gobierno Regional en la ciudad de Puerto Montt.

Igualmente quedó asentado, como hecho inamovible, que tratándose de todos los convenios las tareas serían controladas en su ejecución directamente por la División de Planificación; que tenía derecho a reembolso de gastos de alojamiento y alimentación si debía ausentarse del lugar habitual de desempeño; derecho a cursos de capacitación; que el honorario pactado se pagaría previa emisión de informe de ejecución de la asesoría evaluado por el jefe de división y presentación de boleta de honorarios; que los convenios a honorarios se suscribieron en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, de modo que la relación se regulaba únicamente por las estipulaciones del convenio sin que resulten aplicables, ni aun supletoriamente, las normas del Estatuto Administrativo o Código del Trabajo. También en cada uno se estableció que el plazo de contratación es “mientras sus servicios sean necesarios”, sin perjuicio de fijar una fecha máxima de término, proporcionando la demandada los elementos necesarios para la ejecución de su mandato consistentes en oficina, teléfono, correo electrónico.

Asimismo, que, desde Noviembre 2014 a Enero 2018, la demandante se desempeñó en la ciudad de Chaitén, y solo entre Febrero y Julio de 2018 en el Gobierno Regional, Puerto Montt, siendo desvinculada con fecha 1 Agosto 2018; y que el plan Patagonia Verde es un Plan Especial de Desarrollo de la provincia de Palena y comuna de Cochamó, destinado a promover de forma excepcional y extraordinaria el desarrollo íntegro de dichos territorios, según definición contenida en el artículo 1 del DS 625, de Mayo 2015, del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública.



De contrario la sentencia predica que la actora no probó la existencia de subordinación y dependencia que permita calificar la relación como laboral, puesto que se acreditó que no cumplía sus labores en dependencias del Gobierno Regional sino que en una oficina facilitada por la Gobernación Provincial de Chaitén y en terreno; y no se probó jornada laboral ni control de asistencia, ni tampoco que el Gobierno Regional haya dado instrucciones sobre la forma y oportunidad en la ejecución de sus labores, habiéndose allegado documental consistente solo en solicitudes de feriado y días administrativos.

En razón de lo anterior, se descartó la existencia de relación laboral, ante la ausencia del requisito de subordinación y dependencia, y concluyó que los convenios a honorarios suscritos por las partes se enmarcan dentro del ámbito del artículo 11 del Estatuto Administrativo por tratarse de labores específicas, correspondientes a un plan excepcional y extraordinario denominado Patagonia Verde, y a contar de febrero 2018 en un convenio específico de colaboración entre Gobierno Regional, Subdere y la Cámara Chilena de la Construcción; concluyendo , que al no existir vínculo laboral, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de las demás acciones ejercidas.

Quinto: Que, por su parte, la sentencia impugnada rechazó el recurso de nulidad que dedujo la demandante, quien invocó la causal prevista en el artículo 478 letra b) y, en subsidio, la del artículo 477, en relación con los artículos 7 y 8, del Código del Trabajo

En cuanto a la primera causal, sostiene que el tribunal a quo infringió las normas de la lógica y, en específico, la regla del tercero excluido, por cuanto solo siendo posible para explicar la naturaleza del contrato en cuestión, recurrir al Código del Trabajo o al Código Civil, la sentencia crea una tercera clase al reconocer la concurrencia de índices de subordinación y dependencia sin darle tal carácter; contrariedad que la Corte descarta al amparo de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual que permite el Estatuto Administrativo, por remitirse, en este caso, a las normas del contrato y por ende al derecho civil, pues es cada vez más frecuente que la Administración conceda contractualmente ciertos beneficios a las personas contratadas a honorarios, evitando una precarización mayor de las condiciones en que prestan servicios, y no pueden ser interpretados como demostrativos de un vínculo laboral, o “indicios de laboralidad” como le han llamado, puesto que su sola consideración, desconectados de su contexto y de lo que dispone el marco normativo que autoriza este tipo de



contrataciones, puede conducir a equívocos, ya que, por ejemplo, la exigencia de cumplir un determinado horario o la de supeditarse a ciertas directrices en la ejecución de las labores encomendadas, también son propias de una contratación de carácter civil, más aún cuando se debe velar por la correcta utilización de recursos públicos.

Acusa también infracción a las normas de la sana crítica al considerarse hechos de manera contraria al principio de normalidad. Sobre tal cuestión, la sentencia razona que habiéndose establecido que las partes suscribieron 11 convenios a honorarios, se comparte la conclusión del tribunal del grado en cuanto que los servicios prestados son coincidentes con el marco regulatorio del Estatuto Administrativo, asociados a la ejecución del Plan Patagonia Verde que es específico y determinado, no resultando determinante su permanencia en el tiempo. Igual razonamiento refiere en relación a las funciones acordadas respecto al apoyo al plan de reconstrucción de Chaitén, que evidentemente son específicas y no habituales del Gobierno y, en el caso de la última función acordada, aun cuando pueda considerarse que aquellas labores puedan ser habituales y permanentes de la labor del Gobierno Regional, el inciso segundo del artículo 11 de la ley N°18.834 prevé la posibilidad que se trate de cometidos puntuales y específicos, respecto de los cuáles no opera el requisito de accidentabilidad y no habitualidad que exige el inciso primero de dicha disposición, por tanto, es permitido el contrato a honorarios para labores habituales de la administración. Es así, entonces, que las funciones encomendadas resultan ser claras perfectamente diferenciables de las labores generales y permanentes del órgano, que identifica el artículo 16 de la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, razones por las que no verificándose infracción manifiesta a las normas sobre apreciación de la prueba, conforme a la sana crítica, rechaza la causal principal.

Respecto de la segunda causal subsidiaria, se afirma que la sentencia recurrida no aplicó al caso lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8 y 9 del Código del Trabajo e interpretó erróneamente el artículo 11 del Estatuto Administrativo y los artículos 2006 a 2012 del Código Civil, contraviniendo la jurisprudencia mayoritaria, pues los hechos que se tuvieron por establecidos son suficientes para estimar que entre las partes existió un contrato de trabajo, concurriendo la subordinación y dependencia; argumentos que se estimaron erróneos al



desestimarse la causal principal de nulidad, lo que lleva, igualmente, a rechazar la subsidiaria.

Sexto: Que, a fin de acreditar la existencia de distintas interpretaciones respecto de la materia de derecho propuesta para su unificación, la recurrente cita, en primer término, un fallo de esta Corte pronunciado en los autos rol N° 7.091-2015, que señaló que “los sentenciadores del grado establecieron que la actora desde enero de 2012 se desempeñó mediante múltiples contratos a honorarios, como jornal en el riego, despapelado, corte de césped y desmalezado, dentro de la tarea de mantenimiento, construcción y reposición de áreas verdes, cumpliendo las ordenes y el horario que la demandada dispuso y recibiendo una retribución mensual”, en el contexto de una acción de declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones, declarando que se desempeñó en condiciones que no son compatibles con la modalidad de honorarios, puesto que lo hizo bajo subordinación y dependencia, con obligación de asistencia diaria, cumpliendo horario, y realizando una actividad –aseo y ornato- que es responsabilidad habitual de la municipalidad, por lo que yerran los sentenciadores al estimar como concurrente el régimen especial contenido en el artículo 4 de la ley N° 18.883.

En segundo lugar, trae a colación otra sentencia de este tribunal dictada en los autos rol N° 40.106-17, que estableció que “el trabajador prestó servicios personales en el Centro de Salud Familiar Recreo de la demandada de manera continua desde el 1 de agosto de 2013, desarrollando labores de masoterapia, debiendo concurrir diariamente a distintos puntos de la comuna, hasta el 31 de enero de 2017, mediante sucesivos contratos suscritos conforme al artículo 4 de la Ley N° 18.883. Asimismo, se acreditó que en el devenir de dicho vínculo, los servicios se proporcionaron a cambio de una contraprestación mensual de dinero, contra entrega de una boleta de honorarios y un informe mensual, ejecutados bajo la supervisión e instrucciones de la Corporación Municipal de San Miguel, en jornada de lunes a viernes, con obligación de acudir a distintos lugares de la comuna”, circunstancias que configuran el vínculo de subordinación y dependencia que sirve de base a la calificación de laboralidad.

Por último, señaló otra resolución de esta Corte pronunciada en los autos rol N° 23.647-2014, la que no contiene una descripción de los hechos sobre la base de los cuales resolvió, pero de la revisión de la sentencia de base se advierte que la demanda incoada fue la de despido indirecto deducida contra el



Servicio de Vivienda y Urbanismo, respecto de servicios que abarcan el período 21 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, en cuyo mérito el demandante se desempeñó cumpliendo jornada y horario de trabajo, rindiendo cuenta y percibiendo un estipendio mensual y fijo, en labores de abogado, trabajando en proyectos de pavimentación vinculados al Transantiago, excediendo las funciones establecidas en el contrato celebrado, y contraviniendo la noción de cometido específico y concurriendo indicios de subordinación y dependencia entre las partes.

Séptimo: Que, según se observa, las sentencias ofrecidas para su cotejo no resultan útiles para los efectos previstos en el artículo 483-A del Código del Trabajo, toda vez que las situaciones fácticas expuestas no resultan contrastables con la de marras.

En efecto, tal como se consignó en el motivo que precede, la primera sentencia dio por establecida la ejecución de labores ajenas a la definición contenida en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución”, cuestión que sí resulta aplicable en la especie, desde que la actora desarrolló funciones en su calidad de arquitecta, mientras prestó servicios para la demandada.

Por lo demás, en las dos primeras sentencias ofrecidas se declara expresamente que las funciones desarrolladas por los demandantes eran propias del órgano respectivo, en el primer caso, de aseo y ornato, y, en el segundo, otorgamiento de prestaciones de salud por el municipio, excluyéndose su participación en planes específicos, como en el caso en estudio, en que se concluyó que la actora prestó servicios para el Plan Patagonia Verde y luego el Plan de Reconstrucción de Chaitén.

Adicionalmente, a diferencia de los tres casos citados, en la sentencia impugnada se descartó el cumplimiento de una jornada laboral y la existencia de supervisión directa, dado que los servicios eran prestados mayormente en terreno y sin tal supervisión.

Finalmente, en el caso de la tercera sentencia ofrecida como contraste, si bien los convenios celebrados decían relación con labores a desarrollar en un proyecto específico, Transantiago, se pronunció en el contexto de una acción por despido indirecto, en que, uno de los incumplimientos denunciados, fue



precisamente el desarrollo de funciones más allá de las labores expresamente acordadas en los respectivos convenios, y, que decían relación con funciones propias del servicio, cuestión fáctica que no fue materia de revisión en el presente caso.

Octavo: Que, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

De este modo, para que prospere un arbitrio como el de la especie, es menester la existencia de una contradicción jurisprudencial, que coloque a esta Corte en la obligación de dirimir cuál de las posturas doctrinales en conflicto, debe prevalecer; sin embargo, a la luz de lo expuesto, tal exigencia no aparece cumplida en el caso, desde que no se constata la similitud fáctica que permita efectuar la comparación propuesta, no cumpliéndose con el presupuesto contemplado en el inciso segundo del artículo 483 del Código del Trabajo, razonamientos que conducen a desestimar el presente recurso de unificación de jurisprudencia.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 2.835-2020

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Angélica Cecilia Repetto G., ministro suplente señor Mario Gómez M., y la abogada integrante señora Leonor Etcheberry C. No firma el ministro suplente señor Gómez, obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, veinte de agosto de dos mil veintiuno.





En Santiago, a veinte de agosto de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

